

El CES pide beneficios fiscales para los pueblos por ser generadores de energía

- ▶ Defiende que la discriminación positiva contribuiría a «afrontar el reto demográfico»
- ▶ Llama a utilizar las «posibilidades» de Castilla y León en el actual «cambio de época» por la crisis

ISABEL JIMENO
VALLADOLID

El descenso de la población y el envejecimiento «son retos de futuro» para Castilla y León, como también para España y la Unión Europea, aunque la Comunidad «representa uno de los casos más graves». De ahí que afrontar la cuestión demográfica impregne y salpique el informe de 1.685 páginas y 686 recomendaciones de la 'Situación Económica y Social Castilla y León 2021' elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), que urge a adoptar medidas con soluciones «autóctonas» para cada territorio, pero también a diseñar una estrategia común para las autonomías más despobladas. Y entre las propuestas para contribuir a revertir el devenir sociodemográfico, el CES llama a sacar partido a las potencialidades que tiene Castilla y León, desde sectores productivos clave como la agricultura y la automoción y a aprovechar el papel que las universidades pueden desempeñar en la lucha contra la despoblación. Y que las consideraciones demográficas estén en todas las políticas públicas, que además deben llevar a las administraciones a tener en cuenta la prestación de los servicios públicos en un extenso territorio.

Mirada especial a los pueblos, para los que reclama «incrementar los esfuerzos» de modo que se invierta la dinámica demográfica en las áreas rurales, más afectadas por la caída de habitantes. Y entre las recomendaciones, poner el foco en la generación de empleo, «condición sin la cual no habrá asentamiento de población», pero también no olvidar otros aspectos como la cultura y el ocio en el medio rural. La agricultura y la ganadería tienen aquí un papel que reclama apoyar así como divulgar «la imagen positiva» de la profesión agraria y hacer visible el papel de la mujer en el medio rural, a la vez que diversificar la actividad económica.

Y en un panorama energético en el que se vislumbra dificultades de acceso por el precio o las restricciones



El presidente del CES, Enrique Cabero, expone el informe, junto a los representantes de UGT, CEOE y CCOO // ICAI

de suministro dentro de un contexto geopolítico que requiere «reforzar» las interconexiones energéticas de la Península Ibérica, el CES mira a los pueblos de Castilla y León. Es en el entorno rural donde se genera buena parte de la energía renovable, en la que Castilla y León es excedentaria, ya que su capacidad de generación «es muy superior a sus necesidades», pero no recibe contraprestación alguna por esa aportación. Así que el informe abre el melón del debate al respecto y reclama la posible implantación de un modelo fiscal diferenciado, «empezando» por una fiscalidad «favorable» para las

personas y empresas que se establezcan en el medio rural, pues es aquí donde se genera buena parte de esa energía. «Esta medida actuaría de discriminación positiva para afrontar el reto demográfico y la despoblación», señala el informe del CES, aprobado ayer por unanimidad.

En la misma dirección, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, consideró que «estaría bien» un modelo diferenciado de fiscalidad por el nivel de absorción de CO2 así como la posibilidad de contar con ventajas en el modelo de

financiación autonómica para las autonomías más próximas a los lugares de producción energética dado el «coste» que supone su transporte.

«Optimista y exigente»

El CES también sitúa a la construcción como un sector «estratégico» para la recuperación económica, que ha de enfrentarse al reto de la digitalización así como profundizar en nuevos contenidos formativos para los perfiles profesionales con mayores carencias y trasladar que es un ámbito «que ofrece oportunidades reales de desarrollo de una carrera profesional.

«NO ES UNA OPCIÓN. ES UNA OPORTUNIDAD»

«Inmensa preocupación» en el Consejo por el Diálogo Social

I. J. VALLADOLID

Con sindicatos y empresarios sentados, junto a otros colectivos sociales, económicos y políticos, en el seno del Consejo Económico y Social, el CES expresa en su último informe -aprobado ayer por unanimidad- «su inmensa preocupación» al conocer la «voluntad» del Ejecutivo autonómico «de revisar o eliminar» diversos

programas acordados en el marco del Diálogo Social. Por ello, también insta a la Junta de Castilla y León «a seguir apostando por la concertación, por el Diálogo Social con los legítimos representantes de los trabajadores y empresas, cumpliendo así con los acuerdos alcanzados y la legalidad vigente». Y reclama también al Gobierno autonómico «mantener y

valorar debidamente» este órgano de concertación, así como su «preservación, promoción y desarrollo».

Todo después del anuncio por la parte de Vox del Gobierno regional de meter la tijera a ciertas partidas que llegan a los agentes económicos y sociales a través del Diálogo Social. «Me parece que el Diálogo Social no debe ser cuestionado», defendió el presidente del CES, Enrique Cabero, para quien este foro de encuentro entre patronal, sindicatos y Junta «no es una opción». «Es una oportunidad», además de una «exigencia legal, reivindicó Cabero, quien defendió la labor de CEOE, CCOO y UGT.

